

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-15183-2022
CARATULADO : MAHUIDA/FISCO DE CHILE

Santiago, veintiocho de Mayo de dos mil veinticuatro

VISTOS:

En folio 1, comparece Víctor Hugo Ramírez Valenzuela, abogado, domiciliado en calle 1 Sur N°690, oficina 402, comuna de Talca, en representación judicial y convencional de **TATIANA LISSETTE MAHUIDA OSSES**, agente de viajes, domiciliada en calle 1 Sur N°690, oficina 402, comuna de Talca, **TEIXIA YAMILET MAHUIDA OSSES**, dependiente, domiciliada en calle 1 Sur N°690, oficina 402, comuna de Talca y **HERNA OSSES MONTERO**, pensionada, domiciliada en avenida Lo Ovalle N°1285, comuna de San Miguel, quienes vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1225, cuarto piso, comuna de Santiago, solicitando se condene a la demandada a pagar por concepto de indemnización moral la suma de \$200.000.000.- en favor de cada una de las demandantes, más intereses, reajustes y costas.

Parte por exponer que el objeto de esta demanda es obtener la reparación e indemnización de perjuicios de los daños que en las demandantes generó la desaparición de su cónyuge y padre, Luis Omar Mahuida Esquivel, quien detenta la calidad de detenido desaparecido, ilícito cuya ejecución fue causa por agentes del Estado.

Posteriormente procede a relatar los antecedentes de la desaparición del señor Mahuida Esquivel, explicando que este caso fue investigado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, llegándose a la conclusión de que los derechos humanos de aquel fueron violados gravemente por agentes del Estado. Indica que el relato del caso del señor Mahuida Esquivel consta en el capítulo II del Tomo II del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación reeditado el año 1996, en donde se narra lo siguiente: *“El 20 de noviembre de 1974 fue detenido en Santiago en la vía pública el militante del MIR Luis Omar MAHUIDA ESQUIVEL. Dos días después, en sus respectivos*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

domicilios de la comuna de La Cisterna son detenidos otros dos militantes vinculados políticamente con Luis Mahuida: Antonio Patricio SOTO CERNA y Luis Genaro GONZÁLEZ MELLA.

Los tres detenidos fueron trasladados al recinto de la DINA la Venda Sexy donde fueron vistos por testigos y desde donde desaparecieron.

La Comisión está convencida de que la desaparición de estas tres personas fue obra de agentes del Estado, quienes violaron sus derechos”.

En el tomo 3 del informe de la comisión nacional de verdad y reconciliación se hace referencia a los datos biográficos del señor Mahuida Esquivel, en la siguiente forma: “LUIS OMAR MAHUIDA ESQUIVEL

Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975.

Luis Mahuida, de 25 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Trabajaba como profesor de inglés y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Fue detenido el día 20 de noviembre de 1975 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto en el recinto de detención denominado La Venda Sexy, desde donde desapareció”.

Explica que el Estado de Chile ha reconocido expresamente que Luis Mahuida Esquivel, fue víctima de un delito de lesa humanidad, por lo que a este respecto la demandada no puede sino allanarse a los hechos en cuanto a cómo sucedieron.

Luego procede a referirse a la situación particular de las demandantes, señalando que el hecho generador del daño es el mismo para todas las demandantes, pues estas eran cónyuge e hijas del desaparecido. Refiriéndose a los daños causados a las demandantes relata que don Luis Mahuida era profesor de inglés y contrajo matrimonio con la demandante Herna el día 1 de octubre de 1971. Explica que lamentablemente desde que ocurrió el golpe de estado debieron separarse pues Luis pertenecía al MIR y sabía que lo buscarían, por lo que decidió abandonar el hogar familiar para proteger a su cónyuge e hijas, a quienes igualmente visitaba esporádicamente. Narra que la última vez que vio a doña Herna fue el 17 de noviembre de 1974, oportunidad en la que Luis le dijo “*Hernita, me vienen siguiendo los pacos muy de cerca y tengo mucho miedo*”. Al día siguiente, doña Herna acompañó a su cónyuge a la peluquería, donde se cortó el pelo y la barba para intentar pasar desapercibido. Posteriormente el 19 de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

noviembre de 1974 estuvo aún con doña Herna y finalmente el día 20 de noviembre Luis salió de la casa. Más tarde ese mismo día, a eso de las 13:00 horas, llamó al timbre de la casa la dueña, quien espantada le dice que unos hombres habían estado preguntándole por su marido, a lo que acto seguido aparecieron seis personas que ingresaron a la casa empujando a doña Herna, quienes le dijeron *“ya cabrita, estamos buscando a tu marido, tu sabes que no es ningún pan de Dios, así es que dinos donde está”*. Agrega que el ruido generado por la situación hizo que sus dos hijas se pusieran a llorar de tal forma que las tomaron y se las llevaron con una vecina. Señala que estos hombres, que eran dirigidos por el propio Miguel Krasnoff, le comenzaron a mostrar fotos de personas que buscaban. Relata que mientras era interrogada, algunos de los hombres registraban la casa en forma muy violenta. Manifiesta que luego de varios interrogatorios, los agentes del Estado que estaban en su domicilio trajeron a sus hijas y mientras las consolaba, los agentes del Estado que aún estaban en la casa le pidieron prender el televisor para ver un partido de fútbol que se transmitía en ese momento. Señala que en el intertanto llegó el hermano de Luis a preguntar qué estaba pasando, siendo agredido por los agentes del Estado para luego llevárselo. Luego regreso uno de los hombres quien le dijo que habían detenido a su marido, sin señalar ningún otro detalle al respecto. Señala que ese día los agentes del Estado estuvieron en su casa hasta las 23:00 horas.

Explica que desde el día de la detención de Luis, la vida de las demandantes cambio permanentemente, pues debieron abandonar el departamento en que habitaban debiendo alojarse en distintos lugares pues las seguían, hasta en la calle cuando iban de compras las seguían, estableciéndose por un par de meses la casa de sus abuelos, sin embargo debido a las constantes persecuciones y para no ponerlos en peligro también se fueron de ahí.

Continúa explicando que la falta de oportunidades y el alejamiento de las personas quienes las rodeaban, se hicieron presente también cuando doña Herna intentó buscar trabajo para poder sobrevivir junto a sus hijas, siendo discriminada en reiteradas ocasiones, todo esto mientras sus hijas sobrevivían apenas, gracias a la ayuda de familiares. Relata que cuando doña Herna logró finalmente encontrar un trabajo, que fue en el Servicio Nacional de Salud, agentes del Estado concurrían su lugar de trabajo para amedrentarla, dejándole citaciones para declarar o conversar con sus jefes directos. El hostigamiento que recibió Herna y sus hijas era de tal magnitud que incluso recibían golpes en la puerta de la casa donde estuvieran viviendo a altas horas de la noche, por lo que decidió entregar el cuidado temporal de sus hijas a su suegra, quien tenía mala relación con la familia



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

de doña Herna por lo que transcurrido un tiempo le impedía ver a sus propias hijas. Explica que todas estas situaciones generaron en doña Herna un terror profundo y constante, vivía con miedo, insegura, se produjo un quiebre en su estructura de personalidad, generándosele un trauma que hasta el día de hoy mantiene como consecuencia de todo el pesar vivido en esa época. Finalmente pudo recuperar a sus hijas con las que vivió en Chile hasta el año 1988, fecha en la que gracias a un plan humanitario del gobierno de Australia, lograron abandonar el país, lo que resultó fundamental para mantener la salud y estabilidad mental de Tatiana y Texia, quienes a 1985 contaban respectivamente con 12 y 14 años, ya eran conscientes del peligro constante en el que vivían, no dormían por los golpes en las puertas, se sentían inseguras al salir por temor a ser detenidas e incluso identificaban a los agentes del Estado que seguían los pasos de la familia, donde quiera que fueran. Tanto fue el daño emocional sufrido por sus hijas, que comenzaron a manifestar crisis emocionales, debiendo asistir a tratamiento con sicólogos de la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por Estados de Emergencia, lugar donde se trataron y apoyaron desde 1985, hasta que se fueron a Australia. Añade que la llegada a este nuevo país fue complejo para todas, pues se tuvieron que enfrentar con un país con una cultura e idioma distinto, esto sumado a la distancia con el resto de su familia.

A lo anterior añade que Tatiana y Texia no pudieron disfrutar a su padre y la familia ni siquiera pudo velar los restos de don Luis, siguiendo la búsqueda de sus restos hasta el día de hoy, en forma incansable, pues no existe dolor más profundo para una familia que vivir con la incertidumbre de que pasó con uno de sus integrantes, sin saber lo que sufrió o como fue desaparecido y por sobre todo, sin tener donde siquiera velar su cuerpo.

Continua refiriéndose al Estado de Chile como sujeto pasivo de la acción de marras, explicando que las personas responsables de la desaparición de don Luis eran agentes del Estado de Chile. Señala que espera el Consejo de Defensa del Estado asuma una posición pro derechos humanos, pues nuestro Estado está al servicio de la persona humana y los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y constituyen un límite a su soberanía. Explica que atendido el delito del cual fue víctima don Luis Omar, que constituye un delito de lesa humanidad, no debiendo por ese motivo aplicarse la normativa nacional referida a la prescripción.

Indica que resultaría del todo improcedente tratar de eludir la responsabilidad del Estado vía alegaciones de prescripción civil pues se está frente a un delito de lesa humanidad y por ende es imprescriptible tanto en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

ejercicio de la acción penal como de la consecuencia de ella, la civil, criterio que ha sido utilizado en reiteradas ocasiones por la Excelentísima Corte Suprema.

Ahora refiriéndose particularmente al derecho, aduce que la desaparición de Luis Omar Mahuida Esquivel se encuentra dentro del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad, esto según lo establecido en el Estatuto Militar de Núremberg de 1945. Señala que en estos casos concurren dos principales fuentes normativas, una la Constitución Política del Estado y la otra las normas del derecho internacional público en materia de derechos humanos como es la derivada de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras.

Indica que desde el punto de vista del derecho interno la responsabilidad del Estado emana del inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, la que debe ser interpretada al tenor de lo que se indica en el inciso cuarto del artículo primero y quinto inciso segundo de la propia constitución. Argumenta que al tenor de estas disposiciones se puede concluir que en nuestro derecho público se ha establecido la doctrina denominada responsabilidad objetiva del Estado, la que se funda en una norma de derecho público, distinta de la civil. Aduce que para que concurra esta responsabilidad objetiva de la administración, basta que concurren copulativamente tres elementos, a saber, lesión de un derecho, lesión causada por un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones y relación causal entre los mismos.

Señala que no obstante la discusión doctrinaria que pudiere suscitarse respecto del concepto amplio o restringido de la responsabilidad objetiva del Estado, compartiendo que en un “concepto amplio” debe acreditarse la “falta de servicio” como causa de la responsabilidad del Estado, es dable hacer presente que en este caso en concreto hay un reconocimiento del Estado de Chile de que don Luis Omar Mahuida Esquivel fue víctima de un delito de lesa humanidad. Relata que de esta manera se hace evidente la falta de servicio en el caso de don Luis, así como de todas las personas que fueron víctimas del régimen totalitario impuesto por Augusto Pinochet, y del reprochable y vandálico actuar de la Administración la que, actuando a través de sus agentes, vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos de nuestros compatriotas.

Ahora refiriéndose a las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, explica que en el caso particular de don Luis Mahuida, se vulneró su derecho a la vida que es protegido por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Explica que el Estado de Chile mediante la suscripción de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

Foja: 1

declaraciones y convenciones a nivel internacional o bien, concurriendo con su voto a la aprobación de resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, ha adquirido una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados. De esta forma en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, la cual es la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales.

Arguye que en concreto y respecto a la normativa aplicable es importante tener en consideración lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 63 establece un deber general de reparación en favor de los lesionados en sus derechos humanos. Añade que no existen dudas que los tormentos y vejámenes que debió haber sufrido por Luis Mahuida Esquivel antes de ser desaparecido, en el contexto político producido constituyen delitos de lesa humanidad y por lo mismo tiene el carácter de crimen internacional, siendo la comunidad internacional la agraviada o afectada al producirse. Indica que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y luego de la experiencia de los Tribunales Militares de Núremberg existe conciencia internacional de no tolerar ese tipo de conductas. La tortura resulta ser uno de aquellos delitos que destruyen lo más preciado de la persona humana. Es así que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición en su artículo 7, en los siguientes términos *“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”* También el sistema interamericano de protección de los derechos humanos la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la tortura en su artículo 5.

Señala que no obstante lo anterior, igualmente es menester tener presente que el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la que señala que: *“Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo”*, lo que supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto encontramos también el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que; *“Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones*



«RIT»

Foja: 1

jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

Manifiesta que la normativa que viene citando impone al Estado una serie de obligaciones, debiendo cumplir sus compromisos de buena fe, con la voluntad real y cierta de hacerlos efectivos. Indica que este principio tiene especial importancia, pues se trata de la protección de la persona misma.

Refiriéndose al deber de reparación que pesa sobre el Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció un fallo que clarificó esta situación respecto a la responsabilidad que le cabe al Estado de Chile por los delitos de lesa humanidad cometidos por sus agentes en período de Dictadura Militar y tiene obligación de reparar a las víctimas, esta es la sentencia de 29 de noviembre de 2018 denominado Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Añade que este fallo también resulta importante en cuanto estableció que no es aplicable la prescripción civil de acciones que procuren reparaciones por daños y perjuicios ocasionados por esa clase de hechos.

Finalmente sostiene que de acuerdo a los razonamientos que viene desarrollando resulta evidente que el derecho internacional, en materia de Derechos Humanos ampara una visión holística de la dimensión más honda de la civilidad, manantial inagotable del deber substancial del Estado Democrático, de resarcir el daño que el mismo causó y que en determinado momento de la evolución de nuestra sociedad obstruyó la convivencia y la paz. Así viene en solicitar que el Estado de Chile se haga responsable de la grave violación a los derechos humanos de Luis Mahuida Esquivel reparando a su cónyuge e hijas especialmente en su integridad psíquica, debiendo condenarse al Fisco de Chile a pagar por concepto de indemnización moral la suma de \$200.000.000.- en beneficio de cada una de sus representadas, o a la cantidad que este Tribunal determine, más intereses, reajustes y costas.

En folio 7, rola notificación personal subsidiaria practicada a la parte demandada.

En folio 8, comparece Ernestina Ruth Israel López abogada procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado, en representación judicial de la demandada, quien viene en contestar la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasa a exponer.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

Refiere a las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que tanto la Ley N° 19.234 como la Ley N° 19.992 han concedido a sus beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país el que se accede concurriendo la persona al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la oficina del PRAIS.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también se obtiene el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y la promoción del resto de los derechos humanos.

Arguye que además se les ofrece apoyo técnico y rehabilitación física con la finalidad de superar las lesiones físicas derivadas de la prisión política o tortura, así como también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuación gratuita de los estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo menciona el caso en que un hijo o nieto de un beneficiario, siempre y cuando este último no hubiera hecho uso de este derecho, puede postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Milla, Nuevo Milenio o las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que los reglamentos tengan para esas becas. Por último se entregaron beneficios en vivienda a través del acceso a subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de derechos humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio, el que ha sido reiterado y ratificado en el tiempo.

Expresa que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecunaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estado por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades.

Menciona el documento denominado Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos en el que se ha expresado los programas de reparación, reconociéndose en el mismo la existencia de la problemática de exigir indemnización vía de programas de reparación y en forma paralela, el ejercer una acción civil judicialmente.

A su vez sostiene que una vez que el gobierno ha hecho esfuerzo de buena fe en crear un sistema administrativo que facilite la entrega de beneficios a las víctimas, y permitir a los mismos iniciar litigios en su contra originaría el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, además de poner en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que el segundo sistema no es fácilmente evitable, toda vez que los Tribunales podrían sobrepasar fácilmente los beneficios en relación a los entregados en un programa masivo, lo que podría generar una sensación de desilusión y un cambio de expectativas con los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

programas administrativos. En este mismo sentido, arguye que precisamente se busca el rechazo de nuevas peticiones de indemnización lo que conlleva a un fortalecimiento de los programas de justicia transicional, ya que de no ser así implicaría un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa referente a ello.

Concluye en que la acción deducida se funda en idénticos hechos pretendiéndose una indemnización por los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias, por lo que opone la excepción de reparación satisfactiva por ya haber sido indemnizados el demandante.

Opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497 del Código Civil, toda vez que de acuerdo a lo relatado, la víctima fue detenida en 1975, siendo sometido a apremios ilegítimos y tortura en el marco del régimen dictatorial que regía en ese momento. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone la excepción de prescripción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso el demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando el demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguno de ellos se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por el actor es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que han resuelto bajo ese argumento.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirá percibiendo a título de pensión, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

En folio 12, comparece el apoderado de la parte demandante, evacuando en tiempo y forma el trámite de réplica.

Procede a referirse a las excepciones opuestas por la demandada, partiendo por la de reparación satisfactiva. Explica que las reparaciones indicadas en la contestación se refieren al cumplimiento de una obligación que tiene el Fisco de Chile para con la comunidad internacional y no tiene relación con la reparación del dolor que les ocasionó a sus representados los hechos que se relatan en el libelo pretensor. Explica que una correcta interpretación de las normas que regulan la materia, lleva necesariamente a colegir que los esfuerzos del Estado de Chile de compensar los perjuicios a los que fueron sometidos víctimas civiles en el período de dictadura militar mediante pensiones asistenciales y simbólicas solo tuvieron la finalidad de dar cumplimiento fie a las obligaciones que en materia de Derechos Humanos contrajo el Estado en virtud de instrumentos jurídicos que consagran el derecho a una reparación íntegra de las personas afectadas en sus derechos humanos, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos. Así las reparaciones a las cuales se hace referencia en la contestación de la demanda tienen únicamente por finalidad el cumplimiento por parte del Estado del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

deber internacional que este ha contraído con la comunidad internacional, cuestión que ha sido interpretada de esta forma por la propia Corte Suprema.

Continua explicando que las formas de reparación a las cuales se ha referencia en la contestación de la demanda no dicen relación con la reparación específica, sino que tiene un innegable sentido abstracto y universal. Señala que así las cosas atendida la naturaleza asistencial de las pensiones determinadas por la Ley 19.992 y otras, no existe incompatibilidad en la reparación efectiva del daño provocado por agentes del estado en período de dictadura militar y los beneficios obtenidos por las víctimas de estas acciones.

Explica que con lo que viene sosteniendo no es posible llegar a entender que exista un doble beneficio por el mismo daño, pues la única indemnización que sus representadas han solicitado respecto a lo sufrido durante la dictadura es a partir de la acción de marras, las pensiones y otros beneficios no tiene relación con la reparación particular y puntual del daño moral que le provocaron los hechos relatados en la demanda, los que vale decir no fueron nunca cuestionados por la parte demandada.

En este punto vuelve a citar pasajes del Caso Órdenes Guerra y Otros VS. Chile, en especial en lo que dicen relación con el carácter complementario de las reparaciones económicas que el Estado de Chile ha otorgado mediante leyes promulgadas desde el año 1990 en adelante. De igual manera cita varios considerandos de la sentencia pronunciada el 24 de marzo de 2022 por la Excelentísima Corte Suprema en autos rol N°10.622-2019.

Luego procede a referirse a la excepción de prescripción, indicando que la demandada parece asumir dos posiciones contrarias a este respecto, pues si bien postula la procedencia de la prescripción en el caso de marras, igualmente sostiene y admite que durante el periodo que duro la dictadura las demandantes no pudieron acceder a la justicia. En razón de la dicotomía señalada la demandada no optó por aplicar la prescripción desde una fecha cierta.

Agrega que las acciones que buscan obtener la reparación de perjuicios de delitos cometidos por el Fisco de Chile catalogados como de "lesa humanidad", son imprescriptibles al tenor de los tratados internacionales ratificados por Chile, interpretación respecto de la cual los Tribunales Superiores de Justicia se encuentran contestes. Así toda acción derivada de un delito de lesa humanidad tiene la característica de ser imprescriptible, pues de lo contrario se vulneran principios mínimos de coherencia, unidad y congruencia que tiene que mantener el ordenamiento jurídico. Explica que resulta improcedente invocar normas de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

derecho civil al determinar la prescriptibilidad de acciones civiles emanadas de un delito de lesa humanidad, pretendiendo que la imprescriptibilidad afecta solo penalmente a los ejecutores de las violaciones de derechos humanos, implica infringir lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política del República, que incorpora el derecho a las víctimas de este tipo de delitos a obtener una reparación íntegra a los daños y perjuicios inferidos a consecuencia de violaciones de derechos humanos, esto, por aplicación directa de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Continúa explicando que por tratarse de una acción derivada de delitos de lesa humanidad y encontrándose comprometido el interés público, la justicia internacional y la buena fe del Estado en el cumplimiento de los tratados ratificados por Chile, deben necesariamente aplicarse normas de derecho internacional, incluso y sin perjuicio de que por aplicación directa de existir norma expresa en la materia, debe aplicarse dicha normativa contenida en tratados para resguardar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado con la finalidad de no incumplir con lo dispuesto, entre otras normas, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Finalmente se refiere a la regulación del daño moral, indicando que la cantidad solicitada por sus representadas da cuenta del dolor y aflicción que irrogó para su persona el daño que se les ocasionó, lo que deberá ser evaluado por este Tribunal.

En folio 14, comparece la apoderada de la parte demandada, evacuando el trámite de dúplica mediante la cual ratifica todas las argumentaciones expuestas en la contestación, las que da por reproducidas, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Reitera que en lo tocante a la excepción de reparación satisfactiva respecto al daño moral, este ya ha sido indemnizado, por lo que es procedente lo alegado atendido que el Estado de Chile ha empleado un enorme esfuerzo para reparar el daño producido a las víctimas, ya sea a través de transferencias de dineros, reparaciones simbólicas, etc.

Respecto de la prescripción de la acción deducida, insiste en la importancia de la sentencia que unificó la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la que se transcribió en sus principales argumentos en el escrito de contestación, y la que concluye que las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe en 4 años contados de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

ocurrencia de los hechos, según lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal ya citado, agregando que la misma ha estimado que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, y en específico a lo expresado sobre la prescripción de la acción civil. Alude a jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha resuelto bajo ese argumento.

En folio 15, se recibió la causa a prueba fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales esta habría de recaer, rindiéndose la que obra en autos.

En folio 35, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio N°1, comparece don Víctor Hugo Ramírez Valenzuela, abogado, en representación judicial de Tatiana Lissette Mahuida Osses, Teixeira Yamilet Mahuida Osses y Herna Osses Montero, quienes deducen demanda en juicio de hacienda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, solicitando tenerla por interpuesta, acogiéndola a tramitación y en definitiva que se le condene al demandado al pago de la suma \$200.000.000.-, a favor de cada una de las demandantes, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta su pago efectivo y total de estas, o la suma que el Tribunal determine, con costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que a folio N° 13, comparece doña Ernestina Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasó a exponer.

Argumenta su defensa, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

TERCERO: Que a folio N° 12, comparece la parte demandante, evacuando dentro de plazo legal la réplica, mediante la cual reitera íntegramente lo expuesto en la demanda, y agregando además otras argumentaciones.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

Fundamenta su réplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron presentados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por absolutamente reproducidos para todos los efectos legales.

CUARTO: Que a folio N° 14, comparece la parte demandada, quien estando dentro de plazo legal, evacúa la dúplica, ratificando todas las argumentaciones efectuadas en la contestación.

Basa su dúplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron enunciados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por totalmente reproducidos para todos los efectos legales.

QUINTO: Que, en el folio N° 15, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales iba a versar, los siguientes:

1. Efectividad que la demandante sufrió los daños o perjuicios señalados en el libelo. Naturaleza, especie y monto de los mismos.

2. Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.

3. Efectividad de haber operado la reparación integral, por haberse indemnizado al actor por los hechos que demanda.

4. Efectividad de encontrarse prescrita la acción. Hechos y circunstancias.

SEXTO: Que la parte demandante generó la siguiente prueba no objetada de contrario en orden a acreditar los fundamentos de sus pretensiones:

Instrumental:

En folio 1:

1.- Certificado de nacimiento de Tatiana Lissette Mahuida Osses, emitido el 29 de noviembre de 2022 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

2.- Certificado de nacimiento de Texia Yamilet Mahuida Osses, emitido el 29 de noviembre de 2022 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

3.- Certificado de matrimonio de Luis Omar Mahuida Esquivel y Herna Osses Montero celebrado el 1 de octubre de 1971, emitido el 29 de noviembre de 2022 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

4.- Página N° 798 del Tomo II del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

5.- Página N° 209 del Tomo III del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Testimonial:

En folio 32:

1.- Comparece la testigo Mónica del Carmen Manríquez Altamirano, quien previamente juramentado declaró ante el receptor judicial José Marcelo Guzmán Letelier, en el siguiente tenor: presentada al punto de prueba uno, sostiene que el daño que se les causó a las demandantes debe ser de carácter moral, por todo lo que tuvieron que vivir el fatal día en que desapareció su esposo y padre. Este sufrimiento lo perciben hasta el día de hoy, lo que hace que no puedan hablar mucho sobre el tema porque el mismo le causa mucho dolor y angustia. Repreguntada sobre lo ocurrido al cónyuge de doña Herna, indica que se lo llevaron desde su departamento, parece que el 20 de noviembre de 1974. Repreguntada sobre el paradero actual de Luis Mahuida, dice que está desaparecido y no se sabe nada de él. Respecto a las circunstancias en que ocurrió en la calle, se supone que por agentes de la DINA, y al parecer lo hicieron desaparecer por ser militante del MIR. Continuando con las repreguntas el abogado pregunta si a la fecha de la desaparición don Luis era el proveedor del hogar y sobre las consecuencias que su desaparición para su familia desde el punto de vista económico, indica que efectivamente Luis era el proveedor del hogar y luego de su desaparición doña Herna tuvo que proveer alimento para sus hijas, tuvo que trabajar donde ella no podía encontrar trabajo, encontraba trabajo y la perseguían, tener que ir a otros lugares. También señala que tuvo que dejar el departamento yendo a vivir donde su abuelita y de ahí tuvo que irse también porque le pidieron que se fuera porque estaban todos asustados por la persecución a ella porque las niñas estaban chicas aun y se vio en la obligación de dejar a las niñas encargadas con la suegra que después se las prohibía. Relata que doña Herna logró recuperar a sus hijas por el año 84 aproximadamente, todas en ese entonces visitaban psicólogo por todo el trauma vivido. El trauma continua hasta el día de hoy. Repreguntada sobre si doña Herna y sus hijas vivieron en otro país y si fue así cuando fue y cómo fue su adaptación, señala que se fueron a vivir a Australia, parece que en la ciudad de Brisbane, llegando sin conocer el idioma, lo que fue otro trauma porque les costó mucho la adaptación, especialmente a las hijas que eran adolescentes aún. Por otra parte Herna tuvo que trabajar en lo que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

fuera para poder salir adelante con sus hijas, es decir, esta situación tuvo un costo psicológico importante para todas ellas.

Respecto del segundo punto de prueba, señala que la desaparición de don Luis Mahuida causó un trauma enorme en la familia, fue un cambio radical y traumante.

2.- Comparece el testigo Juan Carlos Jofré Sepulveda, quien previamente juramentado declaró ante el receptor judicial José Marcelo Guzmán Letelier, en el siguiente tenor: presentado al punto de prueba uno indica que siempre escuchó de doña Herna que como familia habían sufrido allanamientos y que cuando detuvieron a su marido, el habían quitado a las niñas, porque los interrogaron, asimismo decía la perseguían, que perdió muchos trabajos por que llegaban los agentes de la PDI o CNI, la seguían al trabajo, la amedrentaban por las noches, la citaban y no llegaban, en general mucha persecución, lo que evidentemente generó en ella mucho miedo de que a sus hijas les fuera a pasar algo. Se ponía muy nerviosa cuando veía Carabineros o militares en la calle. Agrega que sus hijas no tuvieron una niñez fácil y la menor de niñas siempre andaba con pánico, sufría costrones o cosas en el pelo y en la cabeza, solo por los nervios. En resumen desde la desaparición de su esposo doña Herna y sus hijas vivieron en general una vida bien mala, bien difícil porque además no tenían ayuda de nadie.

Repreguntado sobre el nombre del esposo de doña Herna, señala que se llamaba Luis Mahuida e indica que el mismo es detenido desaparecido desde 1974. Repreguntado sobre la detención de Luis Mahuida y a que organismo pertenecían las personas que lo detuvieron y porque se produjo la detención, indica que ocurrió el año 1974 y lo tomaron detenidos en la vía pública estos agentes del Estado en ese tiempo CNI, Krasnoff y otros que eran como 6 o 7 personas que estaban en el departamento por esa época, al marido de esta señora lo habían tomado detenido en la vía pública y a las horas después llegaron al departamento donde se habían alojado con la señora Herna y estuvieron ahí todo el día y revisaron todo por si habían algunas cosas que involucraban al marido en algunas cosas raras, esto fue después de la detención del marido de ella y ahí le quitaron a las hijas y se las entregaron en la tarde. Le dicen que si no conocía a esta persona y a esta otra persona y que sus hijas podían correr la misma suerte. Al parecer el señor Mahuida era de un partido político del MIR. Repreguntado sobre las edades de las hijas, señala que la mayor tenía 3 años y la menor 11 o 10 meses.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

Luego se repreguntó al testigo sobre si Luis era el proveedor de la casa y sobre las consecuencias de su desaparición, explica que cree que don Luis era el proveedor y al parecer después de su desaparición doña Herna y sus hijas vivieron una situación muy mala ya que nadie las ayudaba porque tenían miedo de que les fuera pasar lo mismo, entonces esto provoco que su situación económica empeorara mucho, tuvo que dejar de pagar arriendo y andaban deambulando de casa en casa. También relató que por este mismo motivo doña Herna dejó a sus hijas con su suegra, pero esta luego no quería devolverle a las niñas, las que finalmente recuperó a los dos o tres años.

Repreguntado sobre si las demandantes se trasladaron a otro país, y sobre si conocían el idioma y cómo fue su adaptación al mismo, manifiesta que se fueron a vivir a Australia, sin saber inglés y piensa que fueron a tener una vida más normal, porque allí nadie las perseguiría. Finalmente se le repregunta sobre si toda la situación relatada generó en las actoras una pérdida de oportunidades y sobre si tuvieron que recibir asistencia o tratamiento psicológico, señala que piensa que sí, que tendrían que haber tenido tratamiento y ayuda.

Sobre el punto de prueba dos, indica que si hay relación entre el daño que sufrieron las demandantes y la desaparición de don Luis.

SÉPTIMO: Que, por su parte la demandada únicamente produjo prueba instrumental:

En folio 22:

1.- Oficio ORD. DSGT N° 4792-12590, de fecha 28 de marzo de 2023, del Instituto de Previsión Social (IPS).

I-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL:

OCTAVO: Que, en primer término, corresponde resolver la alegación opuesta por la demandada, y que dice relación con la reparación integral de las demandantes destinadas a enervar la acción indemnizatoria por daño moral pretendida, fundada en los beneficios de los que han recibido las demandantes conforme a las leyes 19.123, 19.992 y 20.874.

Ha acompañado como antecedente el documento refrendado en el considerando precedente, en el que consta que las demandantes han recibido las prestaciones que se indican.

NOVENO: Que, en el contexto político vivido a nivel nacional entre los años 1973 y 1990, el artículo 1 de la Ley N°19.123 dispone la creación de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

“Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago”.

Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, y las demás funciones señaladas en la presente ley”.

En ese sentido, una de las finalidades de la aludida Corporación, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la citada ley consiste en “*Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley*”, recayendo en las personas consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley N°19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

En el mismo orden de cosas, la Ley N°20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1°.

DÉCIMO: Respecto de la defensa en estudio, no desconoce este sentenciador los esfuerzos y la implementación de políticas de Estado vigentes hasta hoy en miras a perseguir la reparación del daño causado por agentes de Estado en el contexto del régimen vigente entre 1973 y 1990, recogidos a través de los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que refrendan e incorporan a las víctimas de violaciones a los llamados Derechos Humanos, cuya dimensión político-social, precisamente, apuntaba a la reparación y fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la responsabilidad del Estado frente a estas acciones, lo que también se ha traducido en las diversas persecuciones penales aún vigentes hasta el día de hoy.

En este escenario, es claro que la Ley N°19.123 y las que se han dictado posteriormente han concedido una serie de beneficios, entre ellos los directamente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

pecuniarios, tanto en materia de salud como otros de carácter simbólico, los que se enmarcan dentro de las finalidades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, según su artículo 2 antes aludido, destinadas a “promover la reparación moral” de las víctimas.

Sin embargo, el hecho que estas prestaciones se hayan fijado por ley en beneficio de las aludidas víctimas gira en torno al concepto de reparación en todas sus dimensiones y, precisamente, dentro de la finalidad que se anota en el párrafo precedente, esto es, la reparación moral, hecho que no supone impedir el ejercicio de acciones civiles contra el Estado por parte del actor.

No consta que las prestaciones otorgadas supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se ejercen, lo que permite colegir, en principio, que la excepción reclamada por la demandada es improcedente.

A mayor abundamiento, las diversas prestaciones reconocidas a nivel legal no apuntan necesariamente a resarcir la dimensión moral del sujeto, sino también el ámbito estrictamente patrimonial y recuperar la pérdida de chances causadas por los actos de agentes estatales (lucro cesante), los que también se ven dirigidos a sus parientes, tales como los referidos al ámbito educacional y en materia de salud.

UNDECIMO: En definitiva, este sentenciador rechazará la excepción en estudio conforme al razonamiento precedente.

II-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

DUODECIMO: De manera subsidiaria a la excepción antes descrita, la parte demandada opuso la de prescripción extintiva de la acción civil, sea en los términos dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, o bien conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, en consideración a la data de los hechos que sirven de sustento de la acción en relación con la interposición y posterior notificación de la demanda.

DÉCIMOTERCERO: En relación con esta materia, la institución de la prescripción, en los términos del artículo 2492 del Código Civil, que precisamente se encuentra destinada a la consolidación de la “*seguridad de las posesiones y del crédito*”, tal como indica el mensaje de dicho cuerpo normativo.

En relación con esta premisa, el artículo 2493 del mismo cuerpo legal es claro en señalar que “*El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio*” y que el artículo 2497 establece que “*Las*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Respecto a esta materia, conforme a la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, el artículo 2332 del Código Civil establece que *“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.*

DECIMOCUARTO: Es un hecho de la causa –y que al menos no aparece controvertido por la demandada-, que el cónyuge y padre de las demandantes, respectivamente, fue detenido por agentes del Estado el 20 de noviembre de 1974 y nunca más se supo de él. Luego en 1984 las demandantes se fueron al exilio a Australia.

Al respecto, es necesario destacar el concepto de delito de lesa humanidad que se encuentra regulado en la Ley N°20.357, que en su artículo 1° indica que *“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias: 2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.*

El mismo articulado, luego de referirse a los delitos de lesa humanidad, al genocidio y crímenes de guerra, dispone en el artículo 40 que *“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”.*

En relación con lo expuesto, de los antecedentes acompañados en folio 1 y en la audiencia testimonial de rolante en folio 32, se describe y se desprende que los delitos cometidos respecto del cónyuge y padre de las demandantes, don Luis Mahuida Esquivel, obedecieron a razones de índole política y que se encuentran vinculados a actos del Estado, en la forma que en dichos medios probatorios se consignan latamente.

DECIMOQUINTO: En este análisis, y por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se desprende que rige, dentro de ese estándar normativo, lo dispuesto en artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ha sido ratificado por el Estado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

Chileno y se encuentra actualmente vigente, que dispone al efecto que *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”*

Sobre el particular, y en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en establecer, por una parte, que *“que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”*, mientras que *“la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia “Velásquez Rodríguez vs Honduras”, dictada con fecha 21 de julio de 1989, párrafos 25 y 26. Consultado en <https://summa.cejil.org/es/entity/i0qbrq3n93utmx6r?page=9>; fecha de consulta 28.04.2022)

DECIMOSEXTO: Todo este razonamiento que se viene sosteniendo hasta acá permite llevar a la conclusión que, en primer término, en materia de Derecho Internacional, y reconocido a nivel interno, los llamados delitos de lesa humanidad gozan de la imprescriptibilidad de la acción penal.

En segundo lugar, sobre la base de la vulneración de los derechos que esas acciones lesivas han causado sobre sectores de la población, los estatutos internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, conceden un derecho a reparación integral, lo que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio patrimonial ocasionado y del que se requiera efectiva reparación.

En este aspecto, lo refrendado en el considerando anterior deja en evidencia que, frente a las dificultades en la persecución de estos hechos y la satisfacción del derecho a la “reparación integral”, resulta contraproducente entonces aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. De lo contrario, se vulneraría precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo, a juicio de este sentenciador, que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana y, por ende, reconocidos dentro del contexto internacional, dado su interés público, los que tiene como base principios de índole superior y que buscan la protección de los derechos más esenciales de cada ser humano.

Además, las normas de prescripción rigen esencialmente para relaciones entre privados y, en el caso de aplicarse en los términos del artículo 2497 del Código Civil, dicen relación con toda cuestión contractual y patrimonial en las que predomina el interés privado en las relaciones con el Estado y sus órganos.

Disponer su aplicación por sobre los tratados internacionales, además, colisiona con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir precisamente que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Este es un tema que, por cierto, ha sido reconocido ya por la Excma. Corte Suprema en diversas sentencias dictadas por la materia (Rol N°8318-2018; Rol N°29944-2019; Rol N°29.617-2019; Rol N°79.259-2020, entre otras).

DECIMOSEPTIMO: Por tanto, en relación con la alegación formulada por la demandada en análisis, tanto en su fundamento principal como subsidiario, deberá ser rechazada al estimar que la acción indemnizatoria en este tipo de materias es imprescriptible atendidos los fundamentos esgrimidos precedentemente.

III-EN CUANTO AL FONDO:

DÉCIMOCTAVO: Que la acción deducida por la parte demandante en el folio 1 de estos antecedentes buscan resarcir el perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado, reconocidos por el propio Estado de Chile en el capítulo II del Tomo II del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación reeditado el año 1996, emanados de la desaparición permanente del padre y marido de las actoras el año 1974.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

De estos hechos, reclama el resarcimiento de las consecuencias que de ello derivaron en su esfera personal.

DÉCIMONOVENO: Que es un hecho de la causa que la parte demandada no ha controvertido la ocurrencia de los hechos denunciados, ni su connotación ni el contexto en que se promovieron aquellos, máxime si han sido considerados los hechos en que se sustenta la acción como parte de los cometidos por agentes del estado en contexto de la violación a los Derechos Humanos, de acuerdo a los informes acompañados a los autos en folio 1 los que no fueron objetados de contrario.

Sin embargo, la demandada hace presente que el daño moral pretendido a base de esos hechos no se cuantifica a partir de un aspecto económico en particular, por lo que entiende que lo solicitado es excesivo, teniendo en consideración todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo a fin de obtener la aludida indemnización y, en subsidio de esa alegación, la regulación debe considerar los pagos ya recibidos y efectuados por el Estado, en armonía con los montos establecidos por los tribunales, los que ha recibido el actor durante años y que seguirá percibiendo con posterioridad.

VIGÉSIMO: En esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”, a lo que el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.

Se ha reconocido que, dentro de la clasificación del daño, atendida su naturaleza, se encuentra el llamado daño moral, que contempla la aflicción, el daño en los sentimientos e integridad espiritual de una persona, que no forman parte del aspecto patrimonial propiamente tal, y que de alguna forma se busca resarcir mediante la indemnización de perjuicios requerida.

Como perjuicio que es, debe ser probado precisamente por quien lo alega, conforme al artículo 1698 del Código Civil.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en este aspecto, se desprende especialmente de la página 798, del Informe Rettig Tomo II y 209 del Informe Rettig Tomo III, que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

Luis Mahuida Esquivel fue detenido el 20 de noviembre de 1974 en la vía pública por un equipo de la DINA, siendo trasladado junto con otros detenidos al recinto de la DINA llamado Venda Sexy, lugar donde fue visto por testigos y de donde desapareció. Además este hecho no fue controvertido por la contraria y además fue corroborado por los testigos cuya declaración consta en folio 32 de estos autos.

Ahora en cuanto a los perjuicios sufridos por las demandantes, este emana precisamente de la desaparición de don Luis Mahuida, su cónyuge y padre. De acuerdo a la testimonial ofrecida, se puede concluir que debido a la detención y desaparición de don Luis, en su rol de padre de familia y atendidas las razones políticas de su detención, resultó en una persecución general para las demandantes, lo que las llevó a exiliarse a Australia. Esta persecución afectó a la unión y normal desarrollo de la familia generando problemas psicológicos para las demandantes.

VIGESIMO SEGUNDO: Así las cosas, este sentenciador estima, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, que las demandantes han acreditado que la desaparición de su cónyuge y padre respectivamente les ocasionó un perjuicio moral pues afectó su dimensión espiritual y psicológica en la forma descrita anteriormente.

Ahora, si bien es dable presumir que una consecuencia lógica de una experiencia traumática como la que relatan las demandantes en el libelo pretensor consiste precisamente en un daño moral de tal entidad que provocó de manera indiscutible un cambio en el desarrollo personal y que permanece en su espiritualidad hasta el día de hoy, como todo perjuicio se requiere prueba para sostener, con precisión, la forma en que ese daño moral no solamente existe, sino que también cómo se ha manifestado o repercutido en los afectados, esto es, su intensidad, de tal manera que ello influirá en el quantum indemnizatorio a fijar.

En este acápite del razonamiento sobre el daño causado, es importante precisar que la prueba testimonial ofrecida, constituye prueba idónea para pronunciarse sobre la existencia del daño y el quantum indemnizatorio por el que se debería acoger la acción deducida, los que refieren a los efectos particulares de cada uno de los demandantes

Dichos antecedentes señalados precedentemente y latamente analizados en el considerando sexto de esta sentencia, permiten dar un parámetro a este sentenciador dentro del cual determinar el monto indemnizatorio a conceder a la parte demandante, que de suyo es complejo al valorizar y poder reflejar la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

intensidad del padecimiento sufrido por ésta frente a los hechos ilícitos ocurridos en el contexto de actuaciones de agentes estatales ocurrido en el periodo ya señalados.

No obstante lo que se viene razonando ha de tenerse en cuenta que la prueba ofrecida en estos autos no es la más abundante y adecuada, y aunque si bien se considera suficiente en lo que dice relación con la calidad de detenido desaparecido del señor Luis Mahuida, en cuanto a los daños solo resulta suficiente para elaborar una presunción al respecto. Sin embargo esta deficiencia probatoria dificulta en sobremanera la determinación del quantum indemnizatorio, lo que se verá reflejado en las sumas que serán concedidas por concepto de indemnización a cada una de las demandantes.

VIGÉSIMO TERCERO: De acuerdo al razonamiento anterior, este sentenciador estima, dada la magnitud de los hechos sufridos por éstos y el perjuicio moral causado se fijará prudencialmente en las sumas que se indican a continuación, donde influirá tanto la edad en la que sufrieron estos hechos como la forma como se generó una ruptura en el estilo de vida; los padecimientos sufridos y las secuelas psicológicas y espirituales que han sido permanentes en su estilo de vida.

De este modo, se colige que en relación al perjuicio moral ocasionado a Herna Osses Montero, se estima que esta debe ser resarcida con la suma de \$15.000.000.- (quince millones de pesos),

Por otra parte en cuanto a los perjuicios moral sufrido por las demandantes Teixia Yamilet Mahuida Osses y Tatiana Lissette Mahuida Osses, este se avalúa en la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos), para cada una de ellas.

VIGÉSIMO CUARTO: Respecto a la alegación de la demandada a fin de considerar los beneficios que las actoras actualmente reciben y que fueron acreditados en autos para los efectos de fijar la indemnización que se concede, se rechazará por los mismos motivos consignados al desechar la excepción de reparación integral, en circunstancias que su argumento plantea, en cierto modo, el mismo efecto que se tuvo en consideración al esgrimir que la parte demandante habría sido resarcida de los perjuicios sufridos con las prestaciones legales concedidas en su favor y que actualmente percibe.

VIGÉSIMO QUINTO: En cuanto al reajuste e interés solicitado, será acogido sólo en cuanto se concederá el aludido reajuste de la suma fijada a título de indemnización conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el mes anterior al del pago efectivo y, a su vez, generará intereses corrientes, todo ello contado desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo.

VIGÉSIMO SEXTO: En cuanto a la condena en costas solicitada, no se accederá a la imposición de dicha carga procesal en circunstancias que la demandada no fue totalmente vencida y que, en todo caso, estima que ha litigado con fundamento plausible en el proceso.

VIGESIMO SÉPTIMO: Finalmente, el resto de la prueba acompañada al proceso por la demandante que no fuere analizados mayormente en el considerando sexto de este fallo, no gozan del mérito suficiente como para alterar lo resuelto precedentemente, al tratarse de antecedentes que no proporcionan otros hechos a considerar al momento de resolver.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra sobre Derecho de Los Tratados y 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Se rechaza la excepción de reparación integral alegada por la demandada.

II.- Se rechaza la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos duodécimo a decimoséptimo de esta sentencia.

III.- Se acoge la demanda interpuesta en el folio 1 de estos antecedentes, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de las siguientes sumas a título de daño moral:

a.- A doña Herna Osses Montero, la suma de **\$15.000.000.- (quince millones de pesos);**

b.- A doña Teixia Yamilet Mahuida Osses, la suma de **\$10.000.000.- (diez millones de pesos);**

c.- A doña Tatiana Lissette Mahuida Osses, la suma de **\$10.000.000.- (diez millones de pesos);**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV

«RIT»

Foja: 1

Dichas sumas deberán pagarse debidamente reajustadas y con los intereses respectivos de acuerdo a lo señalado en el considerando vigésimo quinto de esta sentencia.

V-**Que no se condena** en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y por haber litigado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don Gastón Villagra Santander, juez titular del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Mayo de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMTXNKNTFV